

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Jueves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno.—Fortaleza 21

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1895

JUEVES 28 DE MARZO

Número 38

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA

NEGOCIADO 1°

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 26 y con fecha 25 de Enero último, se comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto:—“Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por Gaspar Bastard Alonso, en solicitud de indulto, ó commutación de la pena de 8 años y 1 día de inhabilitación especial temporal, para ejercer el cargo de guardia municipal, y otros análogos que, con la de 375 pesetas de multa, le impuso la Audiencia de Puerto-Rico, en causa seguida por el delito de infidelidad en la custodia de presos: Considerando, que, el citado reo es de buenos antecedentes, y que el delito no ha causado perjuicio á determinada persona ni revela en su autor, instinto alguno de perversidad: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto, aplicada á las provincias de Ultramar por Real Decreto de 12 de Agosto de 1887: Oída la Sala sentenciadora, y de acuerdo con lo consultado por la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, y con el parecer de Mi Consejo de Ministros: en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en indultar á Gaspar Bastard Alonso, de la mitad de la pena de 8 años y 1 día de inhabilitación especial temporal, para ejercer el cargo de guardia municipal, y otros análogos, que le fué impuesta en la causa de que se ha hecho mérito.—Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil ochocientos noventa y cinco.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, BUENAVENTURA ABARZUSA.—De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos”.

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 1° del actual, de su orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 2 de Marzo de 1895.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha. [615]

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 27 y con fecha 25 de Enero último, se comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto:—“Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada en solicitud de indulto de la pena de 3 años 9 meses y 4 días de prisión correccional, que, la Audiencia de lo criminal de Mayagüez, impuso á Manuel Vega y Padilla, en causa seguida por el delito complejo de atentado á un Agente de la Autoridad, y lesiones menos graves: Considerando, que, el reo de que se trata, es de buenos antecedentes, que, con posterioridad á la ejecutoria, ha observado buena conducta, no ha obtenido rebaja alguna en su condena y que, en el presente caso, media la circunstancia de que el otro procesado y coautor del hecho, goza de libertad, por la rebeldía en que se encuentra. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto, aplicada á las provincias de Ultramar por Real Decreto de 12 de Agosto de

1887; de acuerdo con lo informado por la Sala sentenciadora, lo consultado por la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, y con el parecer de Mi Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en indultar á Manuel Vega y Padilla, del resto de la pena de 3 años 9 meses y 4 días de prisión correccional, y accesorias, que le fué impuesta en la causa de que se ha hecho mérito.—Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil ochocientos noventa y cinco.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, BUENAVENTURA ABARZUSA.—De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos”.

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 1° del actual, de su orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 1° de Marzo de 1895.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha. [615]

NEGOCIADO 2°

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 94 y con fecha 26 del mes próximo pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Remitido á informe del Consejo de Estado en pleno, el expediente sobre reclamación de haberes, intentada por el R. Fray Toribio Minguella, Obispo de Puerto-Rico, dicho Alto Cuerpo lo ha emitido en los términos siguientes:—Excmo. Sr.:—Con Real orden de 25 de Enero, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió á informe del Consejo, el expediente sobre reclamación de haberes, intentada por el R. Fray Toribio Minguella, Obispo de Puerto-Rico.—Al ser presentada á la Ordenación de pagos de la Isla, la nómina de aquellos, sólo se le acreditaban por esta Oficina, veinte días de Noviembre desde el 5, en que tomó posesión por poder, y se le negó el derecho al percibo de los meses anteriores desde la preconización, abonándose al Vicario Capitular, Delgado, la diferencia entre el sueldo de su cargo y lo asignado al R. Obispo, hasta el día anterior á su nombramiento y desde este día la diferencia entre sus haberes y los 6,000 pesos sobrantes.—La Intendencia de Hacienda consultó si deben ó nó abonarse al Prelado los haberes íntegros como él los reclama reintegrándose en el primer caso, por Delgado, lo que ha percibido como Vicario Capitular.—El Prelado dice que no se hallaba en la Península disfrutando licencia, si no esperando el despacho de sus Bulas, y que marchó á Puerto-Rico en cuanto fué consagrado, añade que Delgado no ha gastado un céntimo por razón de su cargo, sino ahorrado el alquiler de casa, pues habitaba en el Palacio Episcopal; que si hubiese hecho gastos de su peculio, deberían abonársele en la parte que del Obispado, vacante por defunción, queda en las Cajas Reales, comprometiéndose el actual Obispo á pagar lo que se acredite gastado por razón del cargo interino.—La diferencia de fechas es la siguiente:—Las Oficinas proponen el pago desde el 5 de Noviembre de 1894, y el Prelado reclama sus haberes á razón de 9,000 pesos desde el 21 de Mayo del mismo año, fecha de su preconización del fiat.—Citan en su abono las Oficinas, la ley 2ª, título 7º, libro 1º de la Recopilación de Indias, y la Real orden de 27 de Julio de 1865.—Don Francisco Delgado cita en su apoyo la Real orden de 1º de Mayo de 1884, y una sentencia del Tribunal de lo Contencioso de 14 de Julio de 1892.—El Negociado correspondiente en ese Ministerio dijo que por Bula de Alejandro VI se confirmó en los Reyes y se amplió el Patronato eclesiástico de Indias facultándole “por Autoridad apostólica y don de especial gracia” para percibir lícita y libremente los diezmos de los vecinos y moradores, y concediéndoles también el dominio de las temporalidades para las fundaciones de Iglesias y congrua sustentación de sus Prelados y Ministros; que la Ley 2ª, título 7º, libro 1º de la Recopilación de Indias, declara que pertenecen á los Arzo-

bispos y Obispos los frutos decimales desde el día del fiat de Su Santidad; pero si los electos no pasan á residir en sus diócesis en la primera ocasión que puedan, no gozarán de tales frutos, que se aplicarán á sus Iglesias; que la Real orden de 27 de Julio de 1865, declaró al Rdo. Obispo de la Habana exento de prestar fianza por lo que había recibido para compra de ornamento; considerando que desde su preconización tenía ya devengadas mayores sumas; que todos los Prelados han venido percibiendo sus haberes desde el día de su preconización. Que si bien hay dos excepciones á favor de Don Juan Perez Angulo y Don Eugenio Nelter que como Deanes rigieron la Diócesis de Manila, esta diferencia se explica, por que el primero sucedió á un Prelado dimisionario; y el segundo gobernó la Sede por muerte de uno y prolongada ausencia de otro, de más de un año. Añade el Negociado que en el caso de Perez Angulo, se resolvió que se le abonasen únicamente los gastos de material de la Administración diocesana y que se mandó que en los presupuestos se fijase una cantidad para los tales gastos de material, para no mermar los emolumentos de los Arzobispos desde su preconización. La solicitud de Nelter, continúa el Negociado, se resolvió en el sentido negativo; pero acudiendo el interesado á lo Contencioso, se revocó la Real orden por la sentencia de 14 de Julio de 1892, basada en las reglas 8ª y 10ª de la Real orden de 1º de Mayo de 1884. Hay sin embargo, añade el Negociado, entre el caso de Nelter y el actual, notable diferencia, pues en aquél el Prelado tardó más de un año en ir á Manila, después de la preconización, y en el de que ahora se trata, marchó el Prelado en cuanto pudo, en escrupuloso cumplimiento de las Leyes de Indias. Añade que aquí no se trata de licencias disfrutadas por los Obispos, Sede plena, sino de un caso de Sede vacante, durante la cual, rigen las Iglesias los Vicarios capitulares. Estos no tienen derecho á percibir más que los haberes de su cargo titular y al abono de los gastos de material de la Administración diocesana, cuya cuantía por su propia eventualidad, no puede fijarse con toda precisión (Real orden de 30 de Octubre de 1862.) Por esta razón figuran en presupuesto englobados con el haber personal de los Arzobispos y Obispos, y parece más justo y equitativo que éstos los paguen á los Vicarios, previa la debida y competente justificación de aquéllos.—Por todas estas consideraciones, el Negociado opina:—Primero. Que el R. Obispo debe disfrutar su haber íntegro desde el 21 de Mayo de 1894, en que fué preconizado, al tenor de 9,000 pesos anuales, pero con obligación de abonar al Vicario Capitular, Don Francisco Delgado, los gastos de Administración diocesana que haya hecho, previa justificación; y segundo. Que puede dictar una disposición que haga extensivo este criterio á los casos análogos que en lo sucesivo puedan ocurrir.—La Sección correspondiente de ese Ministerio está conforme con el anterior parecer del Negociado.—El Consejo comenzará su dictámen exponiendo á V. E. algunas breves consideraciones para demostrar que la cuestión no ofrece la dificultad que para algunos Centros presenta, por que así el contado número de casos análogos que se registran como los principios generales de equidad y justicia en que debe basarse la resolución concurren á la del punto dudoso en el sentido de que deben mermarse lo menos posible los emolumentos de los Arzobispos y Obispos nombrados para las Sillas de Ultramar. El corto número de casos ocurrido demuestra que los Prelados y los Vicarios Capitulares han estado casi siempre en buena inteligencia para el abono de los gastos de la Administración diocesana, por parte de aquéllos á estos, toda vez que no es justo que el honroso nombramiento de Vicarios Capitulares, Sede vacante, hecho por sus compañeros de Cabildo ó confirmado por el ordinario ya en Sede plena, se convierta en perjuicio del nombramiento disminuyendo en los referidos gastos los emolumentos que por su cargo percibe. Esa inteligencia á que el Consejo se refiere es la que debe desearse entre los Prelados y los Obispos, que ya no pueden ni deben sostener hoy los ruidos